



SENTENCIA DEFINITIVA

**Ciudad de México, a veintitrés de septiembre de dos mil
veintiséis.**

Visto para resolver en definitiva el juicio oral mercantil
2213/2024-III, promovido por ***** ** ***** *****
 ***** ** ***** ***** , en contra de ***** *****
 ***** ***** ** ***** ***** ***** , y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el **veintitrés de diciembre de dos mil veinticuatro**, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, turnado el veinticuatro siguiente a este juzgado federal,

***** ** ***** ***** ** ***** ***** ,

demandó en la vía oral mercantil de ***** ***** *****

***** ** ***** ***** , las siguientes prestaciones:

A. El pago de la cantidad de \$ **, **,* (*** pesos**
****/100 moneda nacional),** por concepto de suerte principal, monto que corresponde a la suma de las facturas que se describen en el capítulo de hechos de la presente demanda, emitidas por mi representada a favor de la demandada *****.

B. El pago del 5% (cinco por ciento) mensual por concepto de intereses moratorios a partir de la fecha de vencimiento de cada una de las facturas, establecido en el Anexo de pago a plazos fijos de conformidad con el contrato principal de compra-venta y distribución de fecha 28 de marzo de 2018, liquidación que en vía incidental se presentará en ejecución de sentencia.

C. El pago de los gastos y costas procesales que se generen con motivo de la tramitación del presente asunto y hasta su total solución.”

Fundándose en los hechos y consideraciones de derecho que constan en la demanda, los que en obvio de repeticiones innecesarias se tienen por reproducidos.

SEGUNDO. Admisión y emplazamiento. Por proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veinticuatro, se admitió la demanda a trámite en la vía oral mercantil, se tuvieron por anunciadas las pruebas de la parte actora y se ordenó el emplazamiento de la parte demandada, la cual fue debidamente emplazada mediante edictos.

TERCERO. Rebeldía. Por acuerdo de **seis de abril de dos mil veintiséis**, previa certificación del transcurso del plazo concedido a

la parte demandada para contestar la demanda, se hizo constar que no ejerció ese derecho, continuándose el procedimiento en su rebeldía.

CUARTO. Audiencia preliminar. Por auto de **doce de agosto de dos mil veintiséis** se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar, la cual tuvo verificativo el **veintiséis de agosto de dos mil veintiséis**, sin la comparecencia de la parte demandada, en la que, entre otras cuestiones, se procedió a la calificación de las pruebas ofrecidas por la parte actora y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de juicio.

QUINTO. Audiencia de juicio. Posteriormente, el veintitrés de septiembre de dos mil veintiséis, tuvo verificativo la audiencia de juicio, en la que se hizo relación de las pruebas admitidas en audiencia preliminar; se procedió al desahogo de aquéllas que requirieron preparación especial; se hizo constar la expresión de los alegatos formulados por quienes comparecieron a la audiencia; se declaró visto el asunto; y, se procedió al dictado de la presente sentencia.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos **104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1092, 1093 y 1390 Bis del Código de Comercio**, así como en los Acuerdos Generales **3/2013 y 28/2020** del entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que continúan aplicándose en términos del artículo décimo noveno transitorio de la citada Ley Orgánica, en lo relativo a la competencia territorial, entrada en funciones y competencia material de este órgano jurisdiccional para conocer de asuntos de oralidad mercantil.

Lo anterior, porque la controversia deriva de la aplicación de legislación mercantil federal y únicamente afecta intereses particulares, por lo que la actora ejerció la opción de acudir a la jurisdicción federal; asimismo, en la cláusula trigésima tercera del contrato base de la acción las partes acordaron someter sus diferencias, a elección de la compañía vendedora, entre otros, a los tribunales competentes de la Ciudad de México, lugar en el que señalaron sus domicilios contractuales y que fue elegido mediante la presentación de esta demanda, de manera que se actualiza la sumisión expresa prevista en los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio.

SEGUNDO. Procedencia de la vía. La vía elegida por la parte actora es la apropiada, puesto que la controversia versa sobre actos comerciales consistentes en la compraventa y distribución de neumáticos entre sociedades mercantiles y se reclama el pago del



precio de las mercancías documentado en diversas facturas, en términos de los artículos **3, fracción II, 75, fracción I, 371, 1049, 1390 Bis y 1390 Bis 1 del Código de Comercio**; además, porque se trata de una pretensión de cuantía determinada y no de un procedimiento especial previsto en la legislación mercantil o en otra ley.

TERCERO. Legitimación. Por ser la legitimación una cuestión que atañe al fondo de la cuestión controvertida y sólo puede analizarse en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva, su examen se hace en los siguientes términos:

La parte actora se encuentra legitimada al comparecer como vendedora y acreedora del precio de los bienes objeto del contrato del cual deriva la relación jurídica invocada, conforme a los artículos 78 y 380 del Código de Comercio.

Por su parte, la demandada cuenta con legitimación pasiva, por haber intervenido en ese instrumento como compradora y distribuidora, a quien se atribuye el incumplimiento de la obligación de pago, conforme a los artículos **78 y 380 del Código de Comercio**.

En consecuencia, **se encuentra acreditada la legitimación de las partes en el presente proceso.**

CUARTO. Controversia. De acuerdo con los planteamientos expuestos en el escrito inicial de demanda, la controversia se constriñe en determinar si la demandada incurrió en incumplimiento de las obligaciones de pago derivadas del **Contrato Principal de Compra y Distribución de veintiocho de marzo de dos mil dieciocho** y de las operaciones que dieron lugar a las cuarenta y cinco facturas reclamadas.

Asimismo, deberá dilucidarse si resulta procedente condenar a la demandada al pago de \$***,***.**(***** ***** * **** ** ***** ***** * **** pesos **/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, así como de los intereses moratorios del **5% mensual** previstos en el Anexo número 2 del contrato, desde el vencimiento de las obligaciones, y de los gastos y costas, en los términos planteados por la actora.

QUINTO. Estudio de la acción. La presente sentencia se desarrollará conforme a los artículos **14, 16, párrafo primero, y 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, con respeto a las formalidades esenciales del procedimiento y a los deberes de fundamentación y motivación, privilegiando la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, siempre que no se afecten la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos.

Cabe señalar que, en relación con las cargas probatorias en este tipo de juicios, debe atenderse al contenido de los artículos 1194, 1195 y 1196 del Código de Comercio, que disponen:



Núm. 73, Enero de 1994, Materia Civil, de la Octava Época, Registro: 213648, de rubro y texto siguientes:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

“CUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN DE CONTRATO. LA FALTA DE ACREDITAMIENTO DEL PAGO NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL ACOGIMIENTO DE LAS ACCIONES DE. El acogimiento tanto de la acción de cumplimiento como de rescisión de contrato descansa en el acreditamiento de los siguientes elementos: a) la existencia de la obligación; b) la exigibilidad de ésta y; c) el incumplimiento del deudor, en el entendido de que respecto a este elemento, se ha considerado suficiente con que el acreedor afirme la existencia del incumplimiento, pues conforme a las normas que regulan la prueba, corresponde al deudor demostrar el cumplimiento, si en esto hace consistir su defensa. Sin embargo, como el incumplimiento del deudor constituye tan sólo uno de los elementos integrantes de las referidas acciones, la falta de prueba del pago por parte del deudor no es susceptible de conducir necesariamente en todos los casos al pronunciamiento de una sentencia estimatoria, pues conforme a lo anterior, la carga de la prueba del pago corresponde al obligado únicamente cuando éste afirme el cumplimiento de la prestación a su cargo; pero si la defensa se relaciona con los otros elementos integrantes de las referidas acciones, como pueden ser, por ejemplo, la inexistencia de la obligación o su falta de exigibilidad, o bien, con cuestiones diferentes, como la mora del acreedor, demostradas tales defensas, la acción debe desestimarse aun cuando no esté probado el pago”

Asimismo, toda vez que de los documentos que constituyen base de la acción se encuentran también diversas facturas emitidas por la parte actora, debe tomarse en consideración lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 378/2010, en la que estableció lo siguiente:

“...En este sentido, si la factura es considerada un documento privado, **esta hace prueba legal cuando no es objetada**, en razón de que el propio artículo 1241 del Código de Comercio determina que los documentos privados presentados en juicio por vía de prueba y no objetados por la parte contraria se tienen por admitidos y surten efectos como si hubieren sido reconocidos expresamente. Más aún, si se considera que la factura es un documento que tiene por objeto servir como comprobante fiscal, siempre y cuando su contenido atienda los requisitos señalados en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

No obstante lo anterior, cuando en un juicio entre el comerciante y el adquirente de la mercancía o los servicios, la factura **es objetada, el resultado es que no son aplicables las reglas previstas en los artículos 1391, fracción VII y 1241 del Código de Comercio.**

Efectivamente, las facturas atribuidas a cierto comerciante que además cumplen con las leyes fiscales, se presumen válidas, salvo prueba en contrario y, por tanto, la objeción del adquirente de la mercancía o los servicios bastará para que el juzgador tenga que analizar en su conjunto los demás medios de prueba aportados y admitidos de ambas partes, verificando sus alcances y adminiculándolos para calificar si dicho documento cuenta con fuerza legal.

”
...

Asimismo, tratándose de las facturas electrónicas materia del presente juicio, debe atenderse a la jurisprudencia **PR.A.C.CS. J/14 C (11a.)**, con registro digital **2029953**, del **Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur**, con **residencia en la Ciudad de México**, de rubro: ***“FACTURAS ELECTRÓNICAS (CFDI). SON DOCUMENTOS PRIVADOS CON VALOR PROBATORIO INDICIARIO QUE REQUIEREN ADMINICULACIÓN CON OTRAS PRUEBAS PARA ACREDITAR EL ACTO DE COMERCIO CUYO PAGO SE RECLAMA EN JUICIO MERCANTIL.”***, conforme a la cual dichos comprobantes deben examinarse conjuntamente con los restantes medios de convicción, por lo que en este asunto serán valorados en relación con el contrato, sus anexos, las remisiones y la demás documentación admitida, sin atribuirles eficacia plena para demostrar las entregas por la sola ausencia de objeción.

6



acreditar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo o, en su caso, la circunstancia que impida exigir las, sin que su falta de contestación releve a la accionante de satisfacer la carga probatoria inicial.

Establecido lo anterior, se procede a analizar los elementos de la acción planteada.

El primer elemento de la acción se encuentra acreditado, en virtud de que la parte actora exhibió el Contrato Principal de Compraventa y Distribución de **veintiocho de marzo de dos mil dieciocho**, celebrado entre las partes ***** ** *****
***** ** ***** ** ***** ** ***** , como **“LA COMPAÑÍA”**, y
***** ** ***** ** ***** ** ***** ** ***** , como **“EL DISTRIBUIDOR”**, con los tres anexos que lo integran.

Cabe destacar que el instrumento contiene las firmas atribuidas a ***** y ***** , por la compañía, y a ***** , por la distribuidora, junto con la identificación de las sociedades y la manifestación de actuar en su representación, sin que obre un desconocimiento de tales suscripciones ni prueba que desvirtúe el vínculo documentado.

De las **cláusulas primera y segunda** se advierte que el objeto consistió en la compraventa y distribución de los productos fabricados o comercializados por la actora, que ésta se obligó a vender y la demandada a comprar y distribuir a terceros, mientras que la **cláusula tercera** previó una vigencia indefinida y precisó que la terminación no liberaría del pago de las obligaciones pendientes, lo que explica la celebración sucesiva de las operaciones sin necesidad de un nuevo contrato principal por cada suministro.

En la **cláusula séptima** se pactó la obligación de entregar los bienes adquiridos y de cubrir la contraprestación correspondiente, bajo tres modalidades: descuento por pago puntual y al contado, pago a plazos fijos y descuento por pago puntual en plazos fijos; además, se previó que el pago se efectuaría mediante transferencia bancaria o cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario.

Por su parte, el **Anexo número 1** regula el descuento por pago puntual y al contado; el **Anexo número 2**, el pago a plazos fijos y las consecuencias de la mora; y el **Anexo número 3**, el descuento por pago puntual en plazos fijos, instrumentos que declaran expresamente formar parte del contrato principal y aparecen suscritos por sus representantes, por lo que no constituyen simples condiciones generales ajenas al acuerdo de voluntades.

Los **anexos primero y tercero** se valoran en cuanto explican las modalidades de descuento reflejadas en la facturación, sin derivar de ellos un cobro adicional, mientras que las **cláusulas sexta**

Lo anterior pone de manifiesto la existencia de una relación jurídica entre las partes y de las obligaciones recíprocas de entrega y pago, sin que de la sola celebración del contrato se infiera todavía que todas las mercancías posteriormente facturadas fueron recibidas.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XI.2o.90 C del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, consultable en el Tomo XI, Junio de 2000, página 572, con registro 191714, de rubro: ***“DOCUMENTOS PRIVADOS. SU VALOR EN MATERIA MERCANTIL CUANDO NO SON OBJETADOS EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD.”***

El segundo elemento de la acción también se encuentra acreditado, en virtud de que la parte actora exhibió las documentales consistentes en cuarenta y cinco remisiones y cuarenta y cinco facturas electrónicas, cuyo examen se efectúa por cada operación y no a partir de la sola cifra global mencionada en la demanda.

No.	Pruebas	Remisi n	Factura final	Importe
1	3 y 4	*****	*****	\$,***.
2	5 y 6	*****	*****	\$**,***.
3	7 y 8	*****	*****	\$,***.
4	9 y 10	*****	*****	\$**,***.



No.	Pruebas	Remisió n	Factura final	Importe
5	11 y 12	*****	*****	\$** , *** . **
6	13 y 14	*****	*****	\$** , *** . **
7	15 y 16	*****	*****	\$** , *** . **
8	17 y 18	*****	*****	\$** , *** . **
9	19 y 20	*****	*****	\$, *** . **
10	21 y 22	*****	*****	\$** , *** . **
11	23 y 24	*****	*****	\$, *** . **
12	25 y 26	*****	*****	\$, *** . **
13	27 y 28	*****	*****	\$** , *** . **
14	29 y 30	*****	*****	\$** , *** . **
15	31 y 32	*****	*****	\$** , *** . **
16	33 y 34	*****	*****	\$** , *** . **
17	35 y 36	*****	*****	\$** , *** . **
18	37 y 38	*****	*****	\$** , *** . **
19	39 y 40	*****	*****	\$** , *** . **
20	41 y 42	*****	*****	\$** , *** . **
21	43 y 44	*****	*****	\$** , *** . **
22	45 y 46	*****	*****	\$, *** . **
23	47 y 48	*****	*****	\$, *** . **
24	49 y 50	*****	*****	\$, *** . **
25	51 y 52	*****	*****	\$** , *** . **
26	53 y 54	*****	*****	\$, *** . **
27	55 y 56	*****	*****	\$, *** . **
28	57 y 58	*****	*****	\$, *** . **
29	59 y 60	*****	*****	\$** , *** . **
30	61 y 62	*****	*****	\$, *** . **
31	63 y 64	*****	*****	\$, *** . **
32	65 y 66	*****	*****	\$** , *** . **
33	67 y 68	*****	*****	\$, *** . **
34	69 y 70	*****	*****	\$** , *** . **
35	71 y 72	*****	*****	\$, *** . **



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Del mismo modo, la **remisión** ***** , comprende seis unidades de los productos identificados con los códigos ***** y ***** , y se relaciona con la **factura** ***** , por \$*, **.* ***** ***** ***** ***** ***** ***** , formada por un subtotal de \$*, **.* ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** y \$*, **.* ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** de impuesto al valor agregado, de modo que existe correspondencia entre las unidades de mercancía, los productos y la contraprestación reclamada.

Por su parte, la **remisión** ***** , contiene la anotación manuscrita “*****” y una firma en el espacio de recepción del cliente, y corresponde a dos neumáticos del producto ***** , relacionados con la **factura** ***** , cuyo subtotal de \$, . ***** y el impuesto de \$. ***** integran el importe reclamado de \$, . *****

Finalmente, la **remisión** ***** , y la **factura** ***
 ***** , se refieren a una unidad del producto ***** ,
 con un subtotal de \$, ***.*** ***** ***** *****
 ***** ***** e impuesto de \$***.*** ***** *****
 ***** ***** , que arrojan \$, ***.*** *****
 ***** ***** ,
 por lo que también la última operación queda identificada en cuanto a
 objeto, cantidad y precio.

La misma correspondencia se presenta en los restantes pares documentales del cuadro, que conservan la identidad de cliente, referencia comercial, unidades y precio del suministro respectivo, sin que la coincidencia aritmética sustituya el examen de la entrega, sino que permite corroborar que los documentos se refieren a las mismas operaciones.

En cuanto a la recepción, las remisiones contienen diversos trazos y anotaciones, además de sellos de **DHL** con las leyendas **“SALIDA”** o **“ALMACÉN”**, los cuales corresponden al traslado de las mercancías y no acreditan, por sí solos, su aceptación por la demandada, mientras que las rúbricas carentes de identificación tampoco permiten establecer la calidad de quien las estampó; en particular, la remisión ***** presenta una rúbrica fuera del espacio destinado a la recepción del cliente, el cual se encuentra sin firma, por lo que ese documento no acredita aisladamente la recepción por la compradora.

Tales circunstancias deben apreciarse conjuntamente con la **cláusula trigésima primera** del contrato, conforme a la cual la

ega; por e
represent
es tampo
ón por la
ón conjun

de “REC
acreditan
cha máxim
cha efectiv
ue deben

s operaci
eron sust
veintiuno,
esponden
la remi
*, de **diec**
s sustituci

entación o
comprobant
cada ope
, sin adicio
os del infor

enidos en
s mil veir
correspon
la expresi

pues los f

de los com
pero no s
de los siste
, ya que e
la fiabilidad
robatoria



La suma de los **cuarenta y cinco importes individualizados** es exactamente \$ **, **. ** (***** * **** **
***** * **** ** **pesos **/100 moneda nacional**), que coincide con lo solicitado en la prestación **A)** y permite determinar la cuantía del precio reclamado sin depender exclusivamente de una certificación de saldo elaborada para la actora.

A lo anterior se adminicula la **prueba confesional a cargo de la demandada**, pues en la audiencia de juicio su representante legal no compareció sin causa justificada, pese a encontrarse legalmente citado; por tanto, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y, con fundamento en el artículo **1390 Bis 41, fracciones II y III, del Código de Comercio**, se tuvieron por ciertos esos hechos, salvo prueba en contrario.

La presunción derivada de dicha probanza recae sobre la recepción de las mercancías y no sobre la identidad o representación de quienes estamparon las rúbricas en las remisiones, de manera que, administrada con el contrato, las remisiones y las facturas que individualizan los bienes, cantidades y precios de cada operación, corrobora su recepción por la compradora, sin atribuir a los comprobantes electrónicos eficacia plena de manera aislada ni convertir la rebeldía procesal en una admisión de los hechos.

Así, conforme a los artículos **1238, 1241, 1296, 1298-A y 1390 Bis 41, fracción III, del Código de Comercio**, la valoración conjunta de esos medios de convicción permite tener por acreditada la entrega de las mercancías correspondientes a las operaciones reclamadas.

En consecuencia, se tiene por acreditado el **segundo elemento de la acción**.

Ahora bien, se procede al estudio del tercer elemento de la acción, consistente en la exigibilidad y el incumplimiento de la obligación de pago a cargo de la demandada.

De conformidad con los artículos **78 y 380 del Código de Comercio**, el comprador debe pagar el precio en los términos y plazos convenidos, mientras que el artículo **85, fracción I**, establece que, cuando existe día señalado para el cumplimiento, los efectos de la morosidad comienzan al siguiente del vencimiento, sin necesidad de crear una fecha uniforme para obligaciones que tienen términos distintos.

En este asunto, el contrato y el Anexo número 2 prevén el pago a plazos fijos, y **cada factura final consigna expresamente su fecha de vencimiento**, de modo que la exigibilidad se acredita con el pacto contractual relacionado con el comprobante de cada

Las leyendas de **“0% - 90 días”** o **“0% - 60 días”**, junto con los porcentajes relativos a pagos realizados antes de determinadas fechas, corresponden al régimen de descuentos y plazos de la factura, como se desprende de su texto y de los anexos primero y tercero, por lo que no constituyen una eliminación del interés moratorio convenido para el incumplimiento posterior al vencimiento.

No.	Factura final	Emisión	Vencimiento	Inicio de mora
1	*****	/2021	/2021	/2021
2	*****	/2021	/2021	/2021
3	*****	/2021	/2021	/2021
4	*****	/2021	/2021	/2021
5	*****	/2021	/2021	/2021
6	*****	/2021	/2021	/2021
7	*****	/2021	/2021	/2021
8	*****	/2021	/2021	/2021
9	*****	/2021	/2021	/2021
10	*****	/2021	/2021	/2021
11	*****	/2021	/2021	/2021
12	*****	/2021	/2021	/2021
13	*****	/2021	/2021	/2021
14	*****	/2021	/2021	/2021
15	*****	/2021	/2021	/2021
16	*****	/2021	/2021	/2021
17	*****	/2021	/2021	/2021
18	*****	/2021	/2021	/2021
19	*****	/2021	/2021	/2021
20	*****	/2021	/2021	/2021
21	*****	/2021	/2021	/2021
22	*****	/2021	/2021	/2021



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

No.	Factura final	Emisión	Vencimien to	Inicio mora	de
23	*****	/2021	/2021	/2021	
24	*****	/2021	/2021	/2021	
25	*****	/2021	/2021	/2021	
26	*****	/2021	/2021	/2021	
27	*****	/2021	/2021	/2021	
28	*****	/2021	/2021	/2021	
29	*****	/2021	/2021	/2021	
30	*****	/2021	/2021	/2021	
31	*****	/2021	/2021	/2021	
32	*****	/2021	/2021	/2021	
33	*****	/2021	/2021	/2021	
34	*****	/2021	/2021	/2021	
35	*****	/2021	/2021	/2021	
36	*****	/2021	/2021	/2021	
37	*****	/2021	/2021	/2021	
38	*****	/2021	/2021	/2021	
39	*****	/2021	/2021	/2021	
40	*****	/2021	/2021	/2021	
41	*****	/2021	/2021	/2021	
42	*****	/2021	/2021	/2021	
43	*****	/2021	/2021	/2021	
44	*****	/2021	/2021	/2021	
45	*****	/2021	/2021	/2021	

De ese cuadro se advierte que las obligaciones vencieron entre el **cinco de junio y el quince de agosto de dos mil veintiuno**, con anterioridad a la presentación de la demanda, y que el plazo de las facturas sustituidas se toma del comprobante final reclamado, no del documento anterior, evitando anticipar la mora o duplicar periodos de cobro.

En cuanto al **Estado de Cuenta Certificado de Cliente de treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós**, suscrito por ***** ***** ***** ***** , se trata de un documento contable elaborado a solicitud de la actora con base en información

de su administración y en los documentos anexos, que relaciona las operaciones, los vencimientos y el saldo reclamado.

Por consiguiente, se le reconoce el carácter de **documental privada de contenido contable**, en términos del artículo **1238 del Código de Comercio**, cuyo alcance debe obtenerse de su correspondencia con los comprobantes que examina, sin atribuirle una presunción especial de exactitud que desplace la carga probatoria de la accionante y sin equiparar la presentación de auxiliares a la comprobación integral de libros llevados con todas las formalidades del artículo 1295 del mismo código.

También se examina el dato que podría favorecer a la demandada, consistente en el **pago de \$ **, **, ** ***** ***

***** **efectuado el veintidós de abril de dos mil veintiuno,**
que se menciona en el informe y en los registros anexos, pues el
artículo **1298 del Código de Comercio** impide ignorar el contenido
de un documento presentado por una parte cuando pueda producir
efectos en su contra.

Sin embargo, la relación de aplicación de ese movimiento
corresponde a las facturas ***** , por \$ **, *** ***** *

***** * ***** ***** ***** : y ***** por

***** , que no integran las cuarenta y cinco

La suma de esas cuatro facturas es \$ **, **, **, distinta



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

del pago de \$, .

***** , y el auxiliar refleja

movimientos de aplicación y compensación, circunstancia que no permite presumir una imputación diferente ni trasladar la diferencia como abono a otras facturas; lo relevante para esta controversia es que los folios aplicados son identificables y no coinciden con los de la condena.

En ese mismo sentido, los registros de cancelación de facturas originales y de su sustitución no deben confundirse con pagos de las facturas finales, pues la operación se conserva documentada con un nuevo comprobante por la misma mercancía y su importe se exige una sola vez, mientras que la reclasificación del saldo a una cuenta de cobro dudoso o en litigio representa un registro contable y no una causa jurídica de extinción de la deuda.

Por ello, no se afirma que la demandada jamás hubiera pagado cantidad alguna durante toda la relación, sino que **el pago histórico identificado no corresponde al precio de las cuarenta y cinco facturas materia del juicio**, y no existe en las constancias examinadas un abono aplicado a éstas que reduzca el saldo individual o total que se reclama.

Por cuanto hace a la **ratificación de contenido y firma del Estado de Cuenta Certificado de Cliente de treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós**, a cargo del contador público

de juicio, dicho profesionalista compareció y, una vez que le fue puesto
a la vista el documento en su integridad, reconoció su contenido y la
firma que lo calza, por lo que se tuvo por desahogada la probanza,
de conformidad con los artículos **1241, 1244 y 1245 del Código de Comercio.**

Dicho reconocimiento permite atribuir el documento a su suscriptor y tener por ratificadas las manifestaciones que en él consignó, pero no constituye un reconocimiento de adeudo realizado por ***** ** ***** , pues el compareciente intervino como autor del informe contable presentado por la accionante y no como representante de la sociedad demandada; por tanto, su eficacia debe examinarse conjuntamente con la documental identificada como **Estado de Cuenta Certificado de Cliente de treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós** y con los comprobantes que sustentan las operaciones relacionadas en ésta.

En ese contexto, la ratificación robustece la autenticidad del informe previamente examinado, cuyo contenido resulta concordante con la identificación de las cuarenta y cinco facturas finales reclamadas, sus importes y vencimientos, así como con el saldo de

***** * ***** * ***** * ***** * ***** *

***** ***** ***** * ***** ** ***** ***** *

Asimismo, la ratificación no confiere al estado de cuenta la eficacia especial prevista en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues la pretensión ejercida no deriva de un crédito otorgado por una institución bancaria, sino del pago del precio de mercancías vendidas dentro de la relación comercial acreditada, de manera que subsiste su naturaleza de **documental privada de contenido contable** y no se transforma en un título ejecutivo bancario ni en una certificación legalmente privilegiada del saldo.

Una vez acreditadas la relación contractual, la entrega de las mercancías, los precios individualizados y sus vencimientos, correspondía a la demandada demostrar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, esto es, que pagó las cantidades reclamadas o que se produjo alguna otra causa de extinción, pues el pago constituye un hecho positivo y no es jurídicamente exigible a la actora demostrar de manera directa un hecho negativo indefinido.

En el caso, la demandada no contestó ni ofreció pruebas dirigidas a acreditar el pago de estas facturas, y las documentales de la propia actora, examinadas también en lo que pudiera perjudicarla, no muestran un abono a los saldos del cuadro ni una remisión, compensación o novación que los extinga, por lo que permanece insatisfecha la obligación de cubrir su precio.

¹ Registro digital 203017; Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito; Novena Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, marzo de 1996, página 982; tesis aislada, invocada como orientación y no como jurisprudencia obligatoria.



acción, comprende también los hechos relativos a la falta de pago que hayan sido materia de las preguntas calificadas de legales; por tanto, valorada conforme al artículo **1390 Bis 41, fracción III, del Código de Comercio**, resulta concordante con las documentales y registros contables previamente examinados, sin que el pago histórico identificado la desvirtúe, pues fue aplicado a facturas distintas de las reclamadas, de ahí que corrobore el incumplimiento de las obligaciones cuya existencia y exigibilidad quedaron acreditadas.

La instrumental de actuaciones, se valora conforme al **artículo 1294 del Código de Comercio** para establecer la secuela procesal, el emplazamiento, la falta de contestación y la admisión de pruebas, sin atribuir a esas actuaciones, por sí mismas, la demostración material de cada compraventa, la cual deriva de los documentos anteriormente analizados.

A su vez, la **presuncional legal y humana**, se aprecia con fundamento en los artículos **1277 a 1286, 1305 y 1306 del Código de Comercio**, a partir de los hechos acreditados consistentes en el contrato, la identificación uniforme del cliente, la correspondencia entre mercancías, remisiones y facturas, la individualización de los vencimientos y la permanencia de los saldos en los auxiliares, cuya relación lógica corrobora el incumplimiento del pago de las operaciones reclamadas, sin construir una presunción de verdad a partir de la sola rebeldía.

En consecuencia, al estar acreditadas las obligaciones de pago y su exigibilidad y no existir prueba que demuestre su cumplimiento o extinción, se concluye que la demandada incurrió en incumplimiento, por lo que se tiene por acreditado el **tercer elemento de la acción**.

SEXTO. Decisión. Conforme a lo razonado en los considerandos que anteceden, en los que se acreditaron los elementos de la acción deducida, sin que la demandada hubiera opuesto excepciones ni defensas, y con fundamento en los artículos **78, 376 y 380 del Código de Comercio**, resulta procedente la pretensión reclamada por la parte actora.

En consecuencia, se condena a ***** a pagar a ***** la cantidad de \$** , ** . ** (***** , por concepto de suerte principal, correspondiente exclusivamente a las **cuarenta y cinco facturas finales** individualizadas en el considerando quinto, atendiendo a lo reclamado en la prestación **A)** del escrito inicial de demanda.

La condena no comprende las facturas originales sustituidas como adeudos adicionales, ni las cuatro facturas ajenas a la reclamación vinculadas con el pago histórico examinado, ni intereses

Dicha cantidad deberá ser cubierta dentro del plazo de **TRES DÍAS HÁBILES**, contado a partir de que la resolución cause ejecutoria o sea legalmente ejecutable, con fundamento en el artículo **1079, fracción VI, del Código de Comercio**, apercibida la obligada de que, en caso de incumplimiento, procederá la ejecución forzosa en los términos legales.

De dicha estipulación se advierte que la distribuidora se obligó a cubrir oportunamente las facturas u órdenes de cobro conforme a los plazos autorizados y que, ante el incumplimiento puntual, debía pagar inicialmente un interés moratorio del cinco por ciento mensual, calculado de acuerdo con los días de atraso respecto del valor de las facturas pendientes de pago, sin que la parte actora hubiera reclamado la aplicación de una tasa distinta del cinco por ciento mensual inicialmente convenido.

El artículo **361** reputa interés a la prestación pactada por escrito a favor del acreedor, mientras que el **362⁶** establece que los

Y si consistiere el préstamo en títulos o valores, el rédito por mora será el que los mismos títulos o valores devenguen, o en su defecto el 6 por 100 anual, determinándose el precio de los



deudores que demoren el pago deben satisfacer, desde el día siguiente al vencimiento, el interés pactado para ese supuesto o, en su defecto, el seis por ciento anual; interpretación sistemática que, vinculada con la regulación de la compraventa, permite atender al pacto escrito de intereses moratorios sin convertir la operación en un préstamo de dinero.

En este caso, la tasa se encuentra consignada en un anexo firmado e incorporado al contrato, no únicamente en una condición unilateral impresa en las facturas, por lo que existe un acuerdo de voluntades identificable respecto de la consecuencia económica de la mora.

La estipulación debe examinarse también conforme a los artículos **1o. constitucional** y **21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos**, atendiendo a la naturaleza de la operación y a las circunstancias acreditadas, a fin de determinar si produce un provecho económico excesivo jurídicamente reprochable.

Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia **1a./J. 141/2025 (11a.)**, de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro ***“PROHIBICIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA PERSONA POR LA PERSONA. PUEDE ANALIZARSE EN CUALQUIER CONTRATO QUE CONTENGA INTERESES MORATORIOS, PENAS CONVENCIONALES U OTRO TIPO DE ESTIPULACIONES QUE PUEDAN RESULTAR EN UN PROVECHO ECONÓMICO EXCESIVO PARA UNA DE LAS PARTES.”***⁷⁷

Ese criterio distingue entre la usura vinculada al préstamo o a un negocio análogo que entrañe materialmente un crédito de dinero y el control de intereses moratorios o penas en contratos de otra naturaleza, en los cuales la prohibición genérica de explotación exige examinar si existe una desproporción económica relevante que, en el contexto de la relación, se traduzca en una afectación a la dignidad de la persona, sin que la sola denominación del contrato determine su tratamiento.

El contrato aquí examinado tiene por objeto la **entrega y adquisición de neumáticos para su distribución**, y el precio se documentó en las facturas relacionadas con esas mercancías, sin que se haya acreditado la entrega de una suma de dinero para su posterior restitución ni un componente de préstamo encubierto, por lo que el diferimiento del precio a sesenta o noventa días no basta, por sí solo, para asimilar este negocio a un mutuo o a una operación bancaria de crédito.

valores por el que tengan en la Bolsa, si fueren cotizables, o en caso contrario por el que
tuvieren en la plaza el día siguiente al del vencimiento.

⁷ Registro digital 2030860; Primera Sala; Undécima Época; jurisprudencia 1a./J. 141/2025 (11a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación el ocho de agosto de dos mil veinticinco; criterio derivado del amparo directo en revisión 7997/2023, resuelto el doce de junio de dos mil veinticuatro.

e una fu
implimento
ámetro apli

NA POR
ACIONES
O LA AI
PERSONA

ción.
e del cobr
fas determ
ta o nove
so, y el acc
e cada fac
misma tas

, la preter
por el mism
nto previs
entos de pa
examen se c
a una sum

contratación
sometimie
afectación
distribuidora
y esa concl

Leggiado en Mate (2a.), publicada en la revista, sin sustitu

⁸ Registro digital 2032427; Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; Duodécima Época; tesis aislada I.10o.C.15 C (12a.), publicada el diez de julio de dos mil veintiséis; su utilización es orientadora y complementa, sin sustituir, el parámetro obligatorio de la jurisprudencia 1a./J. 141/2025 (11a.).



La carga económica derivada del transcurso de la mora tampoco constituye, por sí sola, prueba de esa afectación, pues responde al incumplimiento continuado de obligaciones con vencimientos definidos y permanece limitada al saldo pendiente y al tiempo efectivo del retraso, sin perjuicio de que el pago de una factura detenga el devengo correspondiente y reduzca la base en caso de abonos.

Por ello, aun reconociendo la entidad de la tasa, los elementos acreditados no permiten afirmar que, en esta relación concreta, el pacto moratorio configure la explotación definida por el criterio obligatorio ni proporcionan una base objetiva para sustituirlo por un porcentaje distinto elegido discrecionalmente, sin que resulte jurídicamente correcto equiparar su sola cuantía a la usura de un préstamo no acreditado.

La ausencia de los elementos de explotación antes examinados no excluye el control de legalidad ordinaria del pacto, por lo que también debe atenderse a los artículos **2, 77, 78 y 380 del Código de Comercio**, en relación con los artículos **1796 y 2117 del Código Civil Federal**, de aplicación supletoria, conforme a los cuales la obligatoriedad de las estipulaciones contractuales debe examinarse atendiendo a la buena fe y a las limitaciones legales, mientras que las partes pueden convenir las consecuencias patrimoniales del incumplimiento de una obligación dineraria.

En el caso, el accesorio reclamado corresponde a la tasa pactada por escrito y se exige únicamente sobre el precio insoluto de cada compraventa después de su vencimiento, sin comprender capitalización, incrementos unilaterales o indemnizaciones adicionales por el mismo concepto; aunado a ello, de las constancias no se advierte que el pacto hubiera derivado del aprovechamiento de la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria a que se refiere el **artículo 17 del Código Civil Federal**, ni alguna circunstancia concreta que permita tener por actualizada la lesión en los términos de dicho precepto.

Asimismo, la estipulación se analiza como **interés moratorio**, pues la cláusula séptima del Anexo número 2 establece un rédito periódico calculado sobre el importe pendiente de las facturas y en función de los días de atraso, supuesto que se vincula con los artículos **361, 362 y 380 del Código de Comercio**, sin perjuicio del control constitucional, convencional y legal previamente efectuado.

Orienta esa distinción la tesis **XI.3o.19 C**, de rubro ***“INTERESES MORATORIOS. PACTADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PUEDEN REBASAR LA SUERTE PRINCIPAL, PORQUE NO SE TRATA DE UNA CLÁUSULA PENAL.”***, cuyo alcance se retoma únicamente

para diferenciar las figuras, sin utilizarla para excluir el examen de abuso establecido por la jurisprudencia posterior de la Suprema Corte.⁹

En atención a lo expuesto, se condena a *****
***** ***** ** ***** ***** al pago de **intereses moratorios a razón del 5% mensual**, sobre el saldo insoluto de **cada una de las cuarenta y cinco facturas finales** identificadas en el considerando quinto, **desde el día siguiente a su respectivo vencimiento**, conforme a las fechas de inicio de mora ahí individualizadas, y hasta que sea pagado el saldo de la obligación correspondiente.

La liquidación deberá efectuarse por factura, sobre su importe de capital reconocido en esta sentencia y atendiendo a los días efectivos de atraso, sin aplicar el porcentaje mensual como si fuera diario, sin capitalizar intereses ni incluirlos en la base de cálculo, y descontando desde su fecha los pagos que posteriormente se acrediten respecto de la obligación respectiva.

Conforme a los artículos **1330 y 1348 del Código de Comercio**, se reserva a la ejecución únicamente la cuantificación aritmética de los intereses y la aplicación de los pagos posteriores que se acrediten, pues la tasa, el capital por factura, las fechas de vencimiento y los días iniciales de mora quedan establecidos en esta sentencia, sin permitir que en el incidente se incorporen operaciones distintas o se pruebe por primera vez la exigibilidad de las aquí resueltas.

En el caso, no se actualiza la fracción I, porque la actora aportó los documentos examinados para sustentar su acción y la demandada no formuló una excepción o afirmación propia fundada



en hechos disputados que hubiera dejado sin prueba; tampoco se configura la fracción II, al no haberse demostrado la presentación de documentos o testimonios falsos, ni la fracción V, pues no se identifica una actuación de las partes que actualice el supuesto de improcedencia al que se refiere esa disposición, sin que la sola incomparecencia de la demandada permita atribuirle temeridad o mala fe.

Haciendo la aclaración que los supuestos de condena en costas por vencimiento, previstos en las fracciones III y IV del citado precepto legal, no son aplicables a los juicios orales mercantiles; esto, porque el juicio oral es excluyente respecto del juicio ejecutivo en términos del artículo 1390 Bis 1 del Código de Comercio, y porque en este tipo de juicios orales no procede el recurso de apelación conforme al segundo párrafo del artículo 1390 Bis del mismo ordenamiento, de manera que no podría actualizarse el supuesto de dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutive.

Cobra aplicación el criterio jurisprudencial 1a./J. 1/2018 (10a.), emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, página 923, con número de registro 2016352, de rubro siguiente: ***“COSTAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO PROCEDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE ALGÚN ORDENAMIENTO PROCESAL PARA SU IMPOSICIÓN.”***

Por tanto, al no advertir este órgano jurisdiccional que las partes se hubiesen conducido con temeridad o mala fe, o bien, la actualización de alguna de las hipótesis de las fracciones I, II o V, del artículo 1084 del Código de Comercio, no procede hacer condena alguna en costas en esta instancia.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 9/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo I, página 574, Décima Época, de rubro siguiente: **“COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. ALCANCE DEL TÉRMINO “IMPROCEDENTES” A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE COMERCIO.”**

Por tanto, **no se hace especial condena en gastos y costas** en la presente instancia, respecto de la prestación identificada con el inciso **C)** de la demanda.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos **1321, 1322, 1324, 1325, 1327 y 1390 Bis 39 del Código de Comercio**, se

RESUELVE:

PRIMERO. Es procedente la **vía oral mercantil** en la que la parte actora ***** ** ***** ***** ***** **
***** ***** acreditó los elementos constitutivos de la acción ejercida, y la demandada ***** ***** ***** ***** **
***** ***** no opuso excepciones ni defensas, al haberse conducido en rebeldía.

SEGUNDO. Se condena a ***** a pagar a ***** la cantidad de \$ **, **,* (***** pesos **/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal derivada de las **cuarenta y cinco facturas finales** individualizadas en el considerando quinto, conforme a lo resuelto en el considerando sexto de esta sentencia.

TERCERO. Se condena a ***** al pago de los **intereses moratorios**, reclamados por la actora, en términos del considerando séptimo de esta sentencia, monto que deberá ser liquidado y cuantificado en la ejecución correspondiente.

CUARTO. No se hace especial condena en costas en la presente instancia.

QUINTO. Con fundamento en el artículo **1079, fracción VI, del Código de Comercio**, se concede a ***** el plazo de **TRES DÍAS HÁBILES**, contado a partir de que la presente resolución cause ejecutoria o sea legalmente ejecutable, para cumplir voluntariamente la condena líquida, apercibida de ejecución forzosa en caso de no hacerlo, sin perjuicio de la liquidación y posterior exigibilidad del importe de los intereses en los términos ordenados.

Sentencia notificada en la audiencia de juicio.

Así lo resolvió y firma **electrónicamente Dalia Concha Castellanos**, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializada en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, asistida de **Gabriela Salcedo Ortega**, Secretaria con quien actúa y da fe.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

168294844_4006000037158450028.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	GABRIELA SALCEDO ORTEGA		Validez:	BIEN Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.95.22		Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	23/09/26 22:45:01 - 23/09/26 16:45:01		Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	27 85 20 98 30 8d 75 01 3f ec f0 7a ce b0 b5 b8 b0 ce 56 d5 05 ee ad d6 6e 6a 75 01 75 72 38 63 d3 04 a7 ba b8 cc c0 35 a9 6d db 97 c6 69 31 dc c1 a6 df 5d 7b 3d 9c c3 67 3f 5e 81 e0 c6 b6 32 f5 65 23 9b fc a1 99 53 14 c3 da bd 62 da 0d 2a 2f 10 da 5d 64 fd 56 bf ec fd 5e 80 3d 3a 62 2e 6e 75 86 9f 8a a9 76 6c c6 37 9b 26 7c 4c e2 b4 e4 2a c0 40 17 a8 94 99 62 33 b4 43 72 18 43 be 76 0f 09 9a 31 9d 45 d5 67 a1 17 75 2f 0e 86 82 ab 13 40 98 4b bf d8 aa 6d 22 2c 52 68 71 87 ec c0 c8 d2 04 56 82 ae 42 0f 9c 6a 1a 46 fa b2 4e 69 0a 65 b7 55 1b 51 6c f7 0c e3 45 1b 34 24 29 3e 69 fa 9a e9 69 2c 22 af 72 67 47 72 bd 20 a8 79 cd b9 3f 81 ad d0 c5 77 7d 0f 5a 8a 52 04 0a c8 06 44 ff 18 84 71 cc a7 26 00 85 52 75 84 29 13 30 95 04 ba d5 41 06 5f af e7 02 2c 14 c7 32 bf 58 d0 ea d5 02 0e e4 d8 01 63 bb bb dd b6 c6 60 de fb 64 c4 63 37 f2 fa bc 8a 21 32 4c fc 61 61 25 43 f1 29 d9 e1 60 71 b2 4a ea ef 44 95 bd 2c 85 89 3b 24 aa 66 93 7b 20 95 9d d8 66 22 11 43 01 b0 c7 ff 89 2d 28 a4 aa d2 10 b1 55 c0 63 18 69 38 74 54 59 bf 54 a9 1c b3 37 17 22 32 30 a8 91 a6 18 5e 19 22 00 ef e5 76 df 9f 67 78 73 12 4d de a6 9b 51 d8 07 04 7f aa fd ea c9 79 64			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	23/09/26 22:45:01 - 23/09/26 16:45:01			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.95.22			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	23/09/26 22:45:01 - 23/09/26 16:45:01			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	209678144			
Datos estampillados:	eWauMwRboeBm2l57KdxZcFjbl6w=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	DALIA CONCHA CASTELLANOS		Validez:	BIEN Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.02.2b.38		Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	24/09/26 00:10:48 - 23/09/26 18:10:48		Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	a0 55 46 2e 1e f2 5d 79 32 9f 6b 92 6b 59 1f 1f c0 19 94 da ad bd 37 e0 c2 fd 27 06 0d ce 9f b2 c7 c3 6b 29 03 73 b6 18 fc 32 44 a9 fd 4d 47 6e 60 5a 5c 9f da 91 8c 5f 93 93 b9 c1 b9 48 72 f1 80 78 d1 da 42 77 ee d7 25 e8 f4 ff a6 57 f0 02 14 32 11 d1 33 f6 f7 d5 7f b8 5a 8a 03 cb 02 e2 ab de 75 7f 90 fa c0 fd 5b ee 75 5d de 1e 19 0f ec 67 ae d9 7c ae 89 7a 22 f7 6d 5c c3 cf b3 4a c7 44 11 a0 7d 95 f1 39 97 cd f3 70 fc 4e a4 09 ac c3 81 84 cb 3d 61 fa a8 cb b3 59 ee b7 35 79 e2 dd 6c 20 20 18 ba 25 95 7e ed 02 6d 5d 38 14 fe 3f af 65 b8 fe b2 25 fc 7a 54 50 5b a6 71 c8 41 6d 11 0c 66 3e 81 a7 23 06 a5 fd 38 21 b2 e4 75 f4 e8 10 a1 ab 14 50 e0 af 99 fd d2 b0 c8 7b d1 e4 f4 e0 98 7d 5b 3b 70 35 42 72 8f 3e ac 1c e1 e0 84 66 a9 b8 1d b8 e1 1c c6 a0 f1 e0 5d 28 1a 7b 01 52 49 b5 fe 34 62 2d 8a 94 14 ac 8f f4 94 ae f7 1f 14 6c 12 eb 5a 01 37 ac ca cb e2 eb d1 0e 47 a0 9e 46 18 9b 89 27 1a 68 95 d1 dd 96 5a 87 bc dd 6e ca d8 0f 35 1b 86 e5 8d e6 84 ca 41 ea 43 27 21 76 17 cf 68 49 d7 46 c5 f7 9f 29 96 e6 dd 76 4a 36 93 aa d2 23 8a 36 7f 11 69 0d c7 af 85 b6 da 43 b1 a6 e9 f3 e1 0c 01 98 d5 c8 0e 38 7f 3b 02 97 6d 74 72 31 45 5e 73 ea 9a f8			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	24/09/26 00:10:48 - 23/09/26 18:10:48			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.02.2b.38			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	24/09/26 00:10:48 - 23/09/26 18:10:48			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	209748682			
Datos estampillados:	lwCCpDKoGXcQpQAk0gp1oXJi75U=			

El veintitres de septiembre de dos mil veintiseis, la licenciada Gabriela Salcedo Ortega, Secretario(a), con adscripción en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.